

REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 87.

PROCESOS DE RECONCILIACIÓN POSBÉLICA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

Conflicto y gobernabilidad en el norte
de Uganda. Posibilidades y límites de
los ritos de reconciliación *mato oput*

José Carlos Rodríguez Soto

Conflicto y gobernabilidad en el norte de Uganda

Posibilidades y límites de los ritos de reconciliación *mato oput*

José Carlos Rodríguez Soto

“Red Deporte y Cooperación” y Mundo Negro

lcoromoi@yahoo.es

RESUMEN

La guerra que empezó en el norte de Uganda en 1986, una de las más olvidadas de nuestro tiempo, es el resultado de un largo conflicto Norte-Sur en el país y ha provocado el desplazamiento de dos millones de personas, la muerte de unas 100.000 personas y el secuestro de 40.000 niños por parte de la guerrilla del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, Lord Resistance Army). Los repetidos intentos por parte de la sociedad civil, particularmente de los líderes religiosos y tradicionales, de terminar el conflicto de forma negociada han terminado una y otra vez en fracasos que han dado origen a nuevas oleadas de violencia, en su mayor parte dirigidas contra la población civil. En este contexto, la cultura tradicional del pueblo acholi ha desempeñado un papel primordial, al apoyar varias iniciativas de reconciliación. La que ha tenido más éxito ha sido la ley de amnistía, que desde 2002 ha conseguido reintegrar a más de 12.000 personas que han venido del LRA. Sin embargo, el uso de los procesos tradicionales de paz, particularmente el *mato oput*, choca con una realidad demasiado complicada de miles de crímenes cometidos, en ocasiones, por menores que han sido obligados a matar. La intervención de la Corte Penal Internacional de La Haya, a partir de 2004, no ha encontrado un eco muy favorable en la sociedad acholi, que ha visto este tribunal como un obstáculo más que como una ayuda para terminar con esta tragedia. Los dilemas planteados por conflictos de intereses entre la paz y la justicia y el intento de reforzar el papel de los líderes tradicionales para acoger a los combatientes retornados son algunos de los temas subyacentes a este conflicto que tiene, además, una dimensión internacional, ya que ha terminado por afectar a cuatro países africanos.

Palabras clave: África Subsahariana, Uganda, guerra civil, conflicto, mediación, resolución de conflictos, mato oput, gobernabilidad

GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA GUERRA DEL NORTE DE UGANDA

La guerra del norte de Uganda, que se concentra principalmente en el territorio habitado por los acholis, comenzó en agosto de 1986, y desde entonces se ha caracterizado por ser uno de los conflictos más olvidados y destructivos del mundo. Para hacernos una idea de su gravedad, hace cuatro años (2004) las ONG presentes allí aseguraban que unas 1.000 personas morían a la semana como consecuencia de la violencia y de las pésimas condiciones de vida en los campos de desplazados. Asimismo, y a pesar de que durante los últimos dos años –durante un periodo de conversaciones de paz– no ha habido episodios de violencia bélica en la zona, un reciente estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine publicado en 2008 asegura que es el lugar del mundo donde hay niveles más altos de estrés postraumático entre la población desplazada, con especial incidencia entre las mujeres.

Como ocurre a menudo en países africanos, las raíces de este conflicto se remontan a los tiempos coloniales, cuando el sistema británico de “Gobierno indirecto” favoreció a la etnia mayoritaria, los baganda, una sociedad muy estructurada y jerarquizada en torno a la figura de un rey, el Kabaka. Los baganda, y por añadidura la mayor parte de las etnias bantúes del sur del país, tuvieron más posibilidades de recibir educación y de ascender en la escala social. Las gentes de los grupos nilóticos del norte fueron utilizados como reserva de mano de obra barata para trabajos pesados y, sobre todo, como fuente de reclutamiento para el ejército y la policía. El mito de las “razas marciales”, desarrollado por los ingleses, contribuyó a este desajuste, que los propios ugandeses pagarían caro después de la independencia en 1962. Cuando ésta llegó, el rey de los baganda, Mutesa II, ocupó la presidencia del país. Cuatro años más tarde, en 1966, su primer ministro, Milton Obote, un lango del norte, expulsó al rey y se hizo con el poder con ayuda del ejército. Desde aquella fecha se impuso un modelo por el que el control del poder se ha ganado y mantenido por el uso de la violencia. En enero de 1971, mientras Obote acudía en Singapur a una reunión de la Commonwealth, su comandante en jefe del ejército, Idi Amin, le derrocó e inauguró un periodo sangriento en el que al menos 300.000 personas fueron asesinadas. Amin, también originario del norte, de la región del West Nile, realizó grandes purgas en su ejército y asesinó a numerosos oficiales y soldados acholis y langos.

Este uso sistemático de la violencia no es extraño en la política africana. De hecho, de los 53 países de este continente, desde 1960 hasta bien entrado el siglo XXI, 35 de ellos han sufrido conflictos armados, casi todos ellos internos. Es sintomático que en 2003 al menos 23 jefes de Estado o de Gobierno en los países africanos fueran personalidades militares.

Idi Amin fue derrocado en abril de 1979, cuando soldados tanzanos apoyados por varios miles de insurgentes ugandeses invadieron el país desde la frontera con el río Kagera, en el sur. Tras una rápida sucesión de tres presidentes, se convocaron las elecciones en diciembre de 1980, que fueron ganadas por el antiguo presidente Obote y su partido el Congreso del Pueblo Ugandés (UPC, Uganda People's Congress). Yoweri Museveni, uno de los candidatos, acusó a Obote de haber dado un pucherazo electoral y, en febrero de 1981, empezó una guerra de guerrillas que se iba a cobrar al menos otros 300.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, víctimas de masacres perpetradas por el ejército (llamado entonces UNLA, Uganda National Liberation Army [Ejército de Liberación Nacional de Uganda]), sobre todo en la zona conocida como el "triángulo de Luweero". Dado que en aquellos años una buena parte del ejército estaba compuesto por acholis, de manera justa o injusta, éstos se quedaron con la acusación de ser responsables de aquellas matanzas.

En julio de 1985, Obote fue derrocado por su propio ejército, o más exactamente por un grupo de oficiales acholis, que se hacían eco del gran descontento de sus tropas, desgastadas y agotadas por una guerra que parecía no tener fin y que sólo provocaba muertos entre sus filas. Además, los oficiales acholis llevaban mucho tiempo lamentando el hecho de que casi siempre los ascensos eran concedidos a oficiales de etnia lango, la tribu del presidente. El general Tito Okello, un acholi del norte, se convirtió en presidente. Otros grupos rebeldes que habían luchado contra Obote en el sur del país, como el Movimiento Federal y Democrático de Uganda (FEDEMU, Federal Democratic Movement of Uganda) y el Movimiento por la Libertad de Uganda (UFM, Uganda Freedom Movement), así como, en la región del West Nile, el Frente de Rescate Nacional de Uganda (UNRF, Uganda National Rescue Front) y el Ejército Nacional de Uganda Antiguo (FUNA, Former Uganda National Army) se unieron a la recién formada junta militar, pero el Ejército de Resistencia Nacional (NRA, National Resistance Army) de Museveni iba a ser un hueso mucho más duro de roer. Bajo la mediación del presidente de Kenya, Daniel Arap Moi, comenzaron en Nairobi negociaciones de paz que se prolongaron hasta diciembre de 1985, cuando bajo una gran presión Okello y Museveni firmaron un acuerdo de paz. Este frágil acuerdo no duró ni un mes. Con el pretexto de que el ejército de Obote continuaba realizando atrocidades contra la población civil, Museveni —que mientras tanto había conseguido aislar el sur y el oeste del país y dominarlo militarmente— invadió Kampala, que cayó frente al NRA el 25 de enero de 1986. Dos meses más tarde, todo el país estaba bajo el control del NRA. Los soldados de Okello se rindieron o bien escaparon a zonas del sur de Sudán. Otros simplemente escondieron sus armas y se quedaron en sus casas aguardando acontecimientos futuros.

Tras seis meses de relativa calma, algunas unidades del nuevo ejército —bajo pretexto de llevar a cabo una operación de búsqueda de armas del antiguo ejército— comenzaron a realizar todo tipo de atropellos contra la población civil del norte. Este fue el detonan-

te para que comenzara la rebelión contra el nuevo régimen de Museveni. Los antiguos oficiales de Okello regresaron de Sudán en agosto de 1986, y así empezó la guerra en el norte de Uganda, apoyada en aquel momento por buena parte de la población. Como sucede siempre, los descontentos de grupos humanos que no tienen nada que perder alimentan las rebeliones, por ilógicas que estas puedan ser. Aquel primer grupo rebelde se llamaba Ejército Popular Democrático Ugandés (UPDA, Uganda People's Democratic Army). Al mismo tiempo, la rebelión se extendía a otras zonas del norte de Uganda, en particular a las zonas habitadas por las etnias lango y teso, aunque en estos lugares la guerrilla duró pocos años, seguramente por el cansancio de la población y porque sus líderes locales tuvieron la sensatez de pedir a sus jóvenes que entregaran las armas.

A finales de 1986, una hechicera llamada Alice Lakwena, que decía ser un médium que se comunicaba con los espíritus más variopintos, tomó las riendas de algunas unidades del UPDA y comenzó su peculiar grupo llamado Movimiento Armado del Espíritu Santo (HSMF, Holy Spirit Mobile Force), una secta sincretista que tenía normas tan curiosas como la prohibición de parapetarse durante los combates, o el uso de piedras como armas con la creencia de que se convertirían en granadas al ser lanzadas contra el enemigo. Uno de sus mandamientos más curiosos rezaba así: "Tendrás dos testículos, ni más ni menos". Sería para sonreír si no fuera porque muchos de los miles de jóvenes que se unieron a esta secta murieron en combates en los que cayeron como moscas. A finales de 1987, el ejército de Museveni detuvo el avance de los rebeldes de Lakwena a pocos kilómetros de Jinja, la segunda ciudad del país y lugar donde el río Nilo comienza su curso al salir del Lago Victoria. Alice Lakwena huyó a Kenya, donde murió en un campo de refugiados en enero de 2007. Mientras su peculiar ejército se desintegraba y volvía al norte para intentar reorganizarse, ocurrió un hecho decisivo que contribuyó al empobrecimiento de los acholi: bandas de guerreros karimoyón, una tribu vecina de pastores seminómadas bien armados de fusiles automáticos, se dedicaron durante unos dos meses a arrasarlo los poblados acholi y a llevarse cuantas cabezas de ganado –vacas, ovejas y cabras– encontraron a su paso. Pocos dudan de que aquel saqueo, que supuso la quiebra de la base de la economía rural del pueblo acholi, fuera realizado con la connivencia del ejército, ante cuya mirada complacida los acholis perdían toda su riqueza.

Por aquellas fechas comenzó la primera negociación entre el Gobierno de Museveni y el UPDA, diálogo que culminó en junio de 1988 con la firma de un acuerdo de paz en el que el grueso de los oficiales y tropas del UPDA fueron incorporados al ejército regular. Sin embargo, aquello no significó el final de la guerra. Desde aquellos años se han sucedido momentos de gran violencia con periodos de relativa calma, y han tenido lugar distintos intentos por terminar con el conflicto por medio de la negociación pacífica. No obstante, casi siempre ha ocurrido lo mismo: tras varios meses de grandes esperanzas de llegar a la paz, cuando parece que finalmente está al alcance de la mano, siempre ha terminado por suceder algo que ha tirado todo por tierra y ha desatado una nueva

oleada de violencia, casi siempre peor que la anterior. Así ocurrió en 1988, cuando un grupo integrado por restos del Movimiento del Espíritu Santo se quedó fuera de las negociaciones y decidió seguir la guerra bajo el mando de un pariente de Alice Lakwena llamado Joseph Kony, natural de Odek, en el distrito de Gulu, que tenía entonces 27 años. Durante los tres años siguientes, la guerra entró en una fase de estancamiento, con numerosos abusos contra la población civil cometidos por ambas partes. La violencia se instaló en la región Acholi como rutina, y la gente no tuvo más remedio que acostumbrarse a vivir con esa inseguridad, a veces intermitente y a veces continua e insostenible. Hasta que el Gobierno lanzó una durísima ofensiva militar en marzo de 1991, conocida como “Operación Sésamo”, bajo el mando del general David Tiniefuza, en la que se impuso el aislamiento del norte, se restringieron las informaciones sobre lo que ocurría y se detuvieron a varios oponentes políticos del régimen de Museveni. El Gobierno obligó a los campesinos a llevar siempre encima armas tradicionales –lanzas, hachas, arcos y flechas– para unirse a la caza al guerrillero, algo que sólo consiguió enfurecer más a los hombres de Kony, quienes se dedicaron a mutilar la nariz o las orejas a aquéllos sorprendidos con un arco y flechas o con un hacha en las manos. En agosto de 1991 el Gobierno anunciaba que Kony había sido derrotado. Muchos creyeron que la pesadilla había terminado y durante el resto de aquel año y hasta mediados de 1993 apenas hubo incidentes de violencia; parecía que la región Acholi comenzaba a levantar cabeza.

Pero la paz no duró en el norte de Uganda. Durante la segunda mitad de 1993 los guerrilleros de Kony –conocidos ahora con el novedoso y extraño nombre de Ejército de Resistencia del Señor o LRA– comenzaron a recibir ayuda del régimen islámico de Sudán, que se vengaba así del apoyo brindado por Museveni a su amigo John Garang, líder de los rebeldes sudaneses del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés-Sudan People’s Liberation Army (SPLA). No obstante, sería más exacto afirmar que ha sido siempre el Gobierno de Estados Unidos quien ha proporcionado armas y todo tipo de ayudas al SPLA por mediación del Gobierno ugandés de Museveni, uno de sus más firmes aliados en el continente africano, sobre todo como bastión para detener la expansión del terrorismo islámico en África del Este. Durante aquellos últimos meses del año 1993, cuando los guerrilleros de Kony reanudaron sus ataques en la región Acholi, comenzó una nueva iniciativa de paz liderada por una ministra del Gobierno ugandés llamada Betty Bigombe, en la que tomó también parte el obispo anglicano Baker Ochola. Tras varios meses de contactos, finalmente los altos mandos del LRA y del ejército ugandés entraron en negociaciones directas para concluir la guerra y se declaró un alto el fuego que ambas partes respetaron bastante escrupulosamente. Cuando parecía que estaba a punto de firmarse un acuerdo de paz total, Kony pidió seis meses para dar tiempo a todas sus unidades a reunificarse y prepararse para la nueva situación de cese de las hostilidades. Como respuesta, el 6 de febrero del 1994 Museveni lanzó un ultimátum a los rebeldes para que depusieran las armas en un plazo de siete días. No pasaron ni tres días antes

de que se reanudaran las hostilidades. Se discute todavía hoy a qué se pudo deber el fracaso de aquellas negociaciones. Hay quien dice que uno de los factores decisivos fue la envidia de algunos políticos que –en una sociedad marcadamente machista– no estaban dispuestos a aceptar que una mujer se llevara el mérito de haber conseguido la paz. El Gobierno de Uganda siempre ha asegurado que ya incluso durante las negociaciones, el LRA había empezado a recibir un gran apoyo militar del ejército de Sudán, y que aquel tiempo de tregua sirvió al LRA para reorganizarse y tener un tiempo de respiro.

Con el fracaso de la iniciativa de paz de Betty Bigombe, y el apoyo total del Gobierno sudanés al LRA, comenzó el periodo de la guerra marcado por el terror más cruel. El conflicto ha adquirido también durante estos últimos años una dimensión claramente internacional. Atrapados en esta violencia sin límites, la población civil –sobre todo las mujeres y los niños– no ha sido una víctima accidental atrapada en el campo de batalla, sino un verdadero objetivo, como parte de una estrategia diabólica en la que se intenta controlarla, humillarla hasta extremos insospechados e incluso destruirla. El LRA siempre recurrió al secuestro de civiles para reforzar sus filas, especialmente en momentos de debilidad numérica, pero fue sobre todo a partir de 1994 cuando el secuestro de niños y niñas tomó proporciones masivas. UNICEF ha calculado en 40.000 el número de menores que han pasado por esta experiencia indescriptible. Durante años se ha repetido la misma historia interminable: el LRA se infiltra en el norte de Uganda desde sus bases en Sudán, y durante varios meses se dedica a secuestrar a niños, a los que lleva atados con cuerdas y en fila a sus campos de entrenamiento en territorio sudanés donde se les adiestra en el manejo de las armas. Las muchachas, además de ser también ellas obligadas a combatir, tienen que soportar la humillación de ser repartidas entre los comandantes como esclavas sexuales. Al Gobierno de Sudán le ha venido muy bien contar con una reserva inagotable de niños soldados del LRA que han luchado en primera línea contra el SPLA, ahorrándose recursos y posibilidades de pérdidas de sus propios efectivos. A esos mismos niños, de regreso a Uganda ya convertidos en guerrilleros, se les obliga a realizar las peores atrocidades, a menudo contra sus propios familiares, y se les inculca de este modo el miedo a escapar y volver con su familia. Algo más de la mitad de ellos han conseguido escapar, y han llegado destrozados anímicamente, traumatizados, a menudo con enfermedades incurables, convertidos en piltrafas humanas. Miles de padres en el norte de Uganda –algunos de los cuales han perdido a todos sus hijos en una sola noche– han caído en la más absoluta desesperación.

Aunque el LRA atacó siempre objetivos militares, parece haber mostrado una especial predilección por lo que en el lenguaje eufemístico de nuestro tiempo se conoce como *soft targets*, o “daños colaterales”, es decir, la población civil, convertida en objetivo de acciones militares. Viajar por las carreteras del norte de Uganda se convirtió durante años en una experiencia de terror, en la que se iba siempre con el alma en vilo, siempre con el riesgo de caer en una emboscada. Lo más común para el LRA era disparar

hasta matar a todos los ocupantes del vehículo, saquear las pertenencias y después quemar el coche o el autobús, a menudo con los heridos dentro. Ni siquiera los convoyes de ayuda humanitaria de organismos de Naciones Unidas o de las ONG se han librado de estos ataques. El LRA atacó también repetidas veces poblados y suburbios de las principales ciudades (Gulu y Kitgum), muy especialmente de noche, quemando cientos de viviendas. Dormir por la noche escondidos en la maleza –no raramente bajo la lluvia–, al escaso abrigo de los soportales de las tiendas en el centro de las ciudades o en los dormitorios de las misiones, se convirtió en algo habitual para la gente de las zonas rurales, que llamaban a esta práctica *alup*, una palabra acholi empleada para designar un juego parecido al escondite. Los niños y jóvenes que tenían la gran suerte de estudiar en un internado temblaban al llegar la época de vacaciones sólo de pensar que tendrían que pasar uno o dos meses en sus casas, durmiendo escondidos en la hierba.

El LRA realizó también masacres de hasta cientos de personas de una sola vez como método para propagar el terror. La lista es interminable: 200 personas fusiladas en la orilla de un río en la localidad de Atyak en abril de 1995 (después de esta masacre Uganda y Sudán rompieron sus relaciones diplomáticas, que volvieron a restablecer en 2001), y lo curioso es que quien dirigió esta carnicería fue un oficial originario de Atyak, Vincent Ottii, número dos del LRA; otras 150 personas, refugiados sudaneses, fueron asesinadas durante tres días de ataques en el campo de Acholpii, en julio de 1996; 400 en el condado de Lamwo, en enero de 1997; 90 en Mucwini en julio de 2002; y 120 en la aldea de Amyel, el 12 de octubre del mismo año. En febrero de 2004 tuvo lugar la masacre de Barlonyo, en Lira, en la que más de 300 desplazados fueron asesinados, la mayor parte quemados vivos en sus cabañas. Un dato que no se le escapa a nadie que ha vivido en el norte de Uganda es que en casi todos estos asesinatos masivos, el ejército ugandés siempre ha llegado cuando ya era demasiado tarde.

Desde 1994, el Gobierno de Sudán proporcionó minas antitanque y antipersonales al LRA. El ejército ugandés minó también en 1999 amplias zonas de la región Acholi limítrofes con la frontera sudanesa, haciendo imposible para los habitantes de estas zonas regresar a sus hogares. A pesar de esta siembra de minas, sin embargo, parece que los mutilados –o muertos– por ellas habría que contarlos por cientos, más que por miles.

El LRA ha sido mucho más que un grupo de exaltados, compuesto por Kony y un puñado de niños secuestrados, que realizaban actos irracionales y salvajes. Detrás de aquella extraordinaria brutalidad había una organización bien estructurada, cohesionada en torno a la figura de un líder indiscutido, al que se atribuían poderes sobrenaturales, fuertemente apoyada por Sudan, y muy disciplinada. El LRA estaba dividido en cinco brigadas, cada una con su nombre: Sinia, Gilva, Trinkle, Stockree y Control Altar, esta última bajo el mando directo de Kony. Y contaba con oficiales encargados de tareas de coordinación como finanzas, inteligencia, comisaría política, asuntos religiosos, relaciones externas, adiestramiento militar y planificación de operaciones.

En 1999 pasaron once meses de calma en el que la guerrilla del LRA no salió de sus campos militares del sur del Sudán. Al mismo tiempo, el Centro Carter realizó una intensa labor diplomática de mediación entre los gobiernos de Sudán y de Uganda que culminó en la firma de un acuerdo de paz entre ambos países a principios de diciembre de ese año. Un día después, el Parlamento ugandés promulgaba la ley de la amnistía para todos aquellos guerrilleros que depusieran las armas. Sin embargo, los cabecillas del LRA –que no tomaron parte en las negociaciones de paz patrocinadas por el Centro Carter– percibieron el acuerdo de paz entre ambos países como una amenaza para su propia supervivencia, y dos días antes de Navidad de 1999 el LRA volvía a invadir la región Acholi. La misma espiral de violencia de siempre siguió repitiéndose: emboscadas, asesinatos, ataques nocturnos, secuestros de niños, etc. Por si fuera poco, una epidemia de Ébola declarada en Gulu en octubre de 2000 y que duró cuatro meses contribuyó aún más a reforzar el triste aislamiento del norte.

LA LEY DE LA AMNISTÍA Y LOS INTENTOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Después de que en diciembre de 1999 el Parlamento de Uganda aprobara la Ley de la Amnistía, ésta empezó a dar algunos resultados esperanzadores. Esta ley fue el resultado de un amplio consenso en la sociedad acholi, uno de cuyos pilares fundamentales ha sido siempre la resolución pacífica de los conflictos y la restauración de las relaciones rotas por causa de estos. Los líderes religiosos católicos, anglicanos y musulmanes, agrupados desde 1998 bajo la organización interconfesional Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos Acholi (ARLPI, Acholi Religious Leaders' Peace Initiative) y los líderes tradicionales, conocidos en acholi como Rwodi (plural de Rwot), tuvieron una influencia considerable en la elaboración de esta ley.

El presidente tardó aún unas semanas en poner su firma para ratificar la Ley de la Amnistía, y cuando lo hizo –a finales de enero de 2000– expresó su gran escepticismo sobre su eficacia. Museveni y sus generales repetían constantemente que sólo creían en la solución militar. Sin negar que la presión militar contra el LRA los ha debilitado notablemente a lo largo de los años y ha contribuido a pacificar el norte de Uganda, la amnistía ha dado sus frutos, como demuestra el hecho de que a finales de 2005 las estadísticas de la comisión de la amnistía arrojaban resultados esperanzadores: más de 10.000 personas habían recibido certificados de amnistía. La mayoría de los beneficiarios eran personas secuestradas que habían engrosado las filas del LRA contra su volun-

tad, pero también había entre ellos oficiales rebeldes de alta graduación. Es justo señalar, de todos modos, que aun antes de que existiera esta ley el UPDF siempre trató bien a los rebeldes que se rendían e incluso a los que capturaban en combate, y nunca se llevó a ninguno de ellos a los tribunales.

La puesta en práctica de la amnistía no fue fácil. A pesar de que la ley entró en vigor en 2000, fue sólo en 2001 cuando finalmente la comisión de la amnistía abrió oficinas en Gulu y Kitgum y empezó a funcionar, con financiación de la Unión Europea. Sin embargo, había ocasiones en las que en este proceso existían presiones. Dado que en la mayor parte de los casos los jóvenes guerrilleros escapaban durante los combates, casi siempre pasaban algún tiempo en instalaciones militares del UPDF, que podía ir desde unos pocos días a unos pocos meses. No era infrecuente que durante ese tiempo algunos menores de edad que habían pasado tiempo con el LRA recibieran presiones para que se unieran al ejército.

En 2002 vivimos en África las consecuencias de la “guerra total contra el terrorismo”, declarada como respuesta a los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos, que tenía sus ojos puestos en África del Este como uno de los bastiones de expansión del fundamentalismo islámico, había incluido al LRA en la lista de organizaciones terroristas, lo cual nos dejaba en una posición difícil a los que abogábamos por un diálogo de paz. Aprovechando de esta situación, Uganda consiguió un acuerdo por parte del Gobierno de Jartum para permitirle realizar operaciones militares en el sur de Sudán contra los rebeldes. Sudán, por su parte, estaba ansioso por presentar una mejor imagen internacional y por despojarse del sambenito de Estado que prestaba su apoyo a grupos terroristas. A finales de enero de 2002 llegaron a Gulu y Kitgum grandes convoyes militares con tanques y artillería pesada. A principios de marzo, el UPDF lanzó la operación Puño de Hierro contra las bases del LRA en Sudán, que en aquel entonces estaban en las inaccesibles montañas de Imatong. Durante algunos meses la única información accesible sobre lo que ocurría al otro lado de la frontera procedía del UPDF que, como de costumbre, aseguraba que el LRA había sido derrotado, estaba en las últimas y muy pronto “pasaría a la historia”. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Jartum había trazado una “línea roja”, cerca de Juba, al norte de la cual el UPDF no podía realizar sus operaciones. Dado que el ejército ugandés tenía que notificar sus movimientos al Gobierno de Sudán, éste informaba puntualmente a Kony, quien supo ponerse a salvo cada vez que el UPDF lanzaba un ataque.

Para la gente del norte de Uganda, la operación Puño de Hierro supuso un auténtico desastre. Bien pertrechado por el ejército de Sudán –que a pesar de sus declaraciones seguía prestando apoyo militar a Kony– a mediados de junio de 2002, el LRA entraba en el norte de Uganda. Según informaciones que más tarde me confiarían algunos de sus antiguos oficiales, en aquel momento los rebeldes sumarían unos 10.000 efectivos muy bien armados. Los distritos de Gulu, Kitgum y Pader experi-

mentaron una violencia hasta entonces nunca vista. Ataques, incendios de campos de desplazados, emboscadas y secuestros masivos de niños se convirtieron en hechos diarios. Pero la llegada de la guerrilla del LRA a territorio ugandés supuso también una nueva oportunidad para iniciar un proceso de diálogo para terminar con el conflicto por medios pacíficos. A las pocas semanas de iniciar esta contraofensiva, muchos líderes religiosos empezamos a recibir cartas de comandantes rebeldes pidiendo nuestra mediación. Liderados por el arzobispo de Gulu, John Baptist Odama, empezamos actuando con una gran discreción y pidiendo una reunión con el presidente Yoweri Museveni. Tras obtener su visto bueno y coordinarnos con el ejército, que debía dar siempre el permiso para tener contactos de paz en la selva, en julio de 2002 empezamos a tener varios encuentros con comandantes del LRA en lugares remotos del bosque. Negociar dentro de una zona de guerra es altamente arriesgado, como tuvimos ocasión de comprobar en dos ocasiones en las que el ejército –después de habernos concedido el permiso– nos atacó de forma violenta (en una de las ocasiones yo mismo resulté herido). Pero en aquellos días no había otra forma de hacerlo, ya que la guerrilla se mostraba extraordinariamente reticente a ir al extranjero para negociar. Por lo menos conseguimos que la guerrilla y el presidente de Uganda empezaran a intercambiarse cartas, y a romper el mito dominante aquellos días de que “con los terroristas no se puede negociar”.

Esta fase de contactos de paz en la que los líderes religiosos y algunos líderes tradicionales hicimos de mediadores duró dos años, 2002 y 2003, y tuvo infinidad de altibajos. Pronto nos dimos cuenta de los riesgos y dilemas que entrañaba esta actividad. Hablar con los rebeldes podía concederles una legitimidad que no merecían, e incluso uno se preguntaba a veces si no estaría haciéndoles el juego y contribuyendo a extender su propaganda. Además, éramos líderes religiosos, guardianes de valores morales, y ocurrió en ocasiones que al mismo tiempo que hacíamos de mediadores, hablábamos en público denunciando abusos intolerables de los derechos humanos, sobre todo cuando los rebeldes (o el ejército) cometían atropellos contra la población. Por si fuera poco, ocurrió algo que no habíamos previsto: algunos de los jóvenes guerrilleros que encontrábamos en la selva nos pedían ayuda para salir y dejar las armas, algo a lo que nunca nos negamos. Esto hizo que en varias ocasiones la guerrilla empezara a amenazarnos y a acusarnos de no ser neutrales. Debido a diversas circunstancias, hacia principios de 2004 nuestra iniciativa pareció no dar más de sí.

En 2004, la antigua ministra Betty Bigombe estableció contactos telefónicos con altos mandos del LRA y, tras una intensa labor diplomática con el presidente y varias embajadas extranjeras, consiguió que el LRA hiciera una declaración pública de su voluntad de terminar el conflicto por la vía de la negociación, y que el presidente Museveni declarara una tregua en noviembre. Esta nueva iniciativa, a la que prestamos nuestro

apoyo, se desarrolló con gran éxito y en pocas semanas tuvieron lugar varios encuentros de los rebeldes con diversos grupos: líderes tradicionales, líderes religiosos, líderes políticos, incluso –por primera vez– con algunos ministros. Pero el esperado acuerdo de cese de hostilidades, previsto para el 31 de diciembre de ese año, no se materializó. Tras dos meses más de intentos de retomar las negociaciones, estas fracasaron después de que el número tres del LRA, Sam Kolo, que había liderado a los rebeldes durante estos encuentros de paz, desertara de las filas rebeldes.

Hacia finales de 2005 el LRA, ante el aumento de la presión militar sobre ellos, abrió una nueva base en el parque nacional de la Garamba, en el noreste de la República Democrática del Congo. Pocos meses después, en julio de 2006, empezaban en la capital de Sudán del Sur, Juba, negociaciones directas entre una delegación del Gobierno de Uganda y una delegación del LRA, aunque esta última estaba compuesta en su mayoría por exiliados ugandeses que tenían poco conocimiento de la situación real en el terreno y que no eran combatientes, aunque tenían el mandato de Joseph Kony. Desde el principio, un obstáculo importante en estas conversaciones fue que ni Kony ni ninguno de sus comandantes principales acudieron a Juba, aduciendo que la existencia de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional podían ponerles en peligro.

Desde finales de agosto de 2006, cuando se firmó un acuerdo de cese de hostilidades, el norte de Uganda ha conocido un periodo de tranquilidad al callar las armas. Los rebeldes se acantonaron todos ellos en el parque de la Garamba. Esto ha hecho que varios cientos de miles de desplazados hayan regresado a sus hogares (algunos se han reasentado, sin embargo, en los llamados “campos satélite”), aunque muchos de ellos llevan una existencia dividida entre los campos de desplazados y sus aldeas originales, donde no terminan de asentarse del todo, sobre todo debido a la falta de servicios básicos. Muchos no se deciden a volver a sus casas debido al miedo que siempre han tenido a un fracaso de las negociaciones.

La situación actual está marcada por una gran ambigüedad. El 10 de abril de 2008 tenía que haberse producido la firma del acuerdo final de paz, en el puesto fronterizo de Nabanga, entre el Congo y el sur de Sudán, pero Joseph Kony no se presentó, y desde entonces los intentos de hacerle recapacitar han fracasado. Ni siquiera el enviado especial de Naciones Unidas, el ex presidente de Mozambique Joachim Chissano, ha conseguido convencerle. Como suele suceder a menudo en procesos de paz, no exentos de ambigüedades, el LRA ha aprovechado estos dos años de alto el fuego para reorganizarse y muy probablemente reabastecerse de armamento. A finales de septiembre, el LRA realizó ataques violentos contra aldeas del noreste de la República Democrática del Congo y del Sur de Sudán, y secuestró a varios cientos de jóvenes, lo que parece que hace esfumarse cualquier posibilidad de volver a un escenario de paz y de final completo de la guerra.

EL MATO OPUT

Durante todos estos años de conflicto violento, la cultura acholi de reconciliación y paz no ha desaparecido, y ha servido de inspiración para que la gente de a pie intentara luchar por la paz a su manera, de una forma distinta a los políticos. Quisiera ilustrar esto con la exposición del *mato oput*, un proceso tradicional de reconciliación que yo mismo he tenido la fortuna de presenciar. Vaya este caso como muestra.

Un día de 1995 Kibwota, un joven natural de Omiya-Anyima, peleó con furia contra Ochen y al final de la reyerta le mató de un navajazo. Cuatro años después tuve la suerte de ser invitado al *mato oput*, la ceremonia de reconciliación que sana las heridas de la enemistad y repara las relaciones rotas. Aún lo recuerdo como uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Según la mentalidad de los acholis, el homicidio trae consigo automáticamente una separación entre las dos familias, la del asesino y la de la víctima. Esta barrera (llamada *ujabo* en acholi) crea un estado de enemistad (*mone*) que no permite que los miembros de ambos clanes puedan sentarse a comer y beber juntos, ni se puedan casar entre ellos, ni siquiera comprar en el mercado productos que vengan de la familia con la que existe este estado de separación. Además, el homicidio clama venganza (*chulo kwor*) y provoca miedo.

Mato oput es el procedimiento pacífico tradicional para pagar esa deuda, el *kwor*, por medio de una compensación entregada al clan ofendido. No traigo aquí a colación palabras técnicas por pura erudición ni mucho menos por ostentación, sino para hacer ver que el uso de un lenguaje tan preciso (hay muchas más palabras que pertenecen al vocabulario específico de este ritual) habla de una mentalidad rica y muy elaborada en torno a la reconciliación y el diálogo como medios para resolver los conflictos. Los acholis piensan que este estado de enemistad es antinatural y potencialmente peligroso. Por eso los líderes de ambas comunidades, cuando empiezan a serenarse los ánimos, buscan la manera de empezar a tener contactos para resolver el asunto por medio de un proceso de conversaciones que puede llevar años.

En épocas pasadas, la compensación se pagaba entregando una muchacha (*nyako kwor*), o a veces dos, o al menos suficientes cabezas de ganado, para poder pagar la dote por otra joven y de esta forma hacer que un chico del clan de la víctima pudiera casarse y engendrar nuevos hijos que sustituyeran la vida humana perdida por el asesinato. Hoy día se usa dinero, y este fue el caso en el ritual que yo presencié. La ceremonia tuvo lugar, como es habitual, durante la estación seca, en este caso a principios de febrero. Cada clan se sitúa en una de las orillas del lecho del arroyo, que en aquella época del año está seco. El maestro de ceremonias explicó a los asistentes el significado del ritual en el que iban todos a participar, exhortándolos a que dejaran de lado todo sentimiento de animosidad y odio. Los líderes del clan del asesino expresaron su total rechazo hacia el crimen cometido y pidieron perdón por el crimen cometido por uno de sus

miembros, por el que habían realizado el esfuerzo de reunir un dinero para pagar como indemnización (entregada ya el día anterior). A continuación, los ancianos del clan de la víctima dijeron que perdonaban al asesino y que en el futuro no habría ningún tipo de sentimiento de rechazo ni deseo de venganza.

Alguien trajo entonces una oveja, que fue sacrificada a la vista de todos en medio del lecho seco del arroyo. Se le dio muerte cortándola a lo largo en dos mitades con una afilada hoja de lanza nueva, mientras los ancianos mantenían cerrada la boca del animal para evitar que emitiera gritos o gemidos. El hígado del animal fue depositado en un fuego cercano y cortado en porciones pequeñas que fueron distribuidas a todos los presentes para ser consumidas; lo mismo se hizo a continuación con la carne de la oveja. Cada clan comió por separado su parte, que fue entregada por los miembros del otro clan. Este gesto de aceptación de alimento de la familia rival empieza a marcar el comienzo de una nueva relación. Entonces empezó la parte central del ritual. En el centro del río se colocó una enorme mitad de calabaza hueca, que fue llenada con cerveza local de mijo. Uno de los ancianos rayó con un cuchillo la raíz de un arbusto conocido como *oput* y lo mezcló con el brebaje. Esta raíz da a la cerveza un sabor amargo, para recordar a los participantes que así de desagradable es el sabor del estado de enemistad entre los seres humanos, que debe durar lo menos posible. Entonces empezaron a levantarse los miembros de ambos clanes, los cuales —de dos en dos— se arrodillaron frente a la calabaza, pusieron sus manos a la espalda y bebieron juntos mientras tocaban sus cabezas. Los ancianos me explicaron que al colocar las manos a la espalda estaban expresando su sincero deseo de no luchar y de no hacerse nunca más daño. Tras aquella hermosa ceremonia, todos se dirigieron a una de las aldeas cercanas, donde se había preparado comida y bebida en abundancia, y la fiesta siguió hasta el amanecer. A partir de este momento se rompió la enemistad entre los dos clanes y la vida volvió a la normalidad al haber concluido la animosidad que les separaba. Este es el sistema tradicional de reconciliación entre los acholi del norte de Uganda. En muchos otros pueblos de África existen ceremonias similares, todas ellas con la misma filosofía subyacente: que las simples medidas punitivas que aíslan al criminal no resuelven el problema de fondo. Se pone el acento en la restauración de las relaciones rotas, para que el final del conflicto sea la reconciliación.

Durante los últimos años, como suele ocurrir con las sociedades en crisis, ha habido numerosas propuestas de utilizar la tradición, en este caso el *mato oput*, como instrumento para traer la paz al norte de Uganda. No es de extrañar que se haya exagerado bastante sus posibilidades reales. Es altamente encomiable y digno de admiración que dos clanes enemistados por el homicidio de uno de sus miembros se reconcilien mediante un proceso de diálogo, aceptación de responsabilidad, pago de compensaciones y petición y recepción de perdón. Pero uno se pregunta si realmente es posible usar este sistema tradicional —concebido para estos casos no demasiado complicados— para una situación en la que varios miles de personas (guerrilleros del LRA, pero también fuerzas guberna-

mentales) han cometido crímenes horribles durante un periodo largo de tiempo, y en la que en la mayoría de los casos no se sabe a ciencia cierta quién ha cometido cada uno de los crímenes. El profesor de la London School of Economics, Tim Allen, ha analizado magistralmente estos dilemas en su libro *Trial Justice. The LRA and the Internacional Criminal Court*, publicado en 2006. Uno de los puntos que recoge en su trabajo es que el *mato oput* se ha idealizado hasta extremos insospechados. Y desde luego no parece que se haya utilizado durante los últimos años para reintegrar a ningún antiguo combatiente del LRA. Personalmente, pienso que en la mentalidad de las víctimas de esta guerra uno se encuentra con dos elementos que coexisten: por una parte, es cierto que la gente sigue teniendo un espíritu de reconciliación que no debe menospreciarse; por la otra, tampoco puede negarse que el agotamiento que ha generado esta guerra en la gente que vive en el norte de Uganda ha hecho que muchos desarrollen una actitud bastante pragmática que podría describirse como “no nos importa que se haga lo que sea, incluso perdonar los crímenes más horribles, con tal de que se termine la guerra de una vez por todas”.

LOS RETORNADOS Y LA AMNISTÍA

En honor a la verdad, el *mato oput* no ha sido utilizado en su forma tradicional para recibir a combatientes del LRA, pero sí se puede decir que el espíritu de reconciliación que lo anima ha estado muy vivo. Ya hemos señalado que la mayor parte de los combatientes del LRA son niños y jóvenes secuestrados y obligados a combatir entre sus filas.

En otros conflictos que se han desarrollado en países africanos, la secuencia del proceso de paz y reconciliación se ha desarrollado más o menos de la siguiente manera: conversaciones de paz, cese de hostilidades, firma del acuerdo de paz, desarme y desmovilización de combatientes (protegidos por una amnistía), reintegración en sus comunidades de origen y proceso de reconciliación (que a menudo incluye mecanismos varios de justicia transicional, como comisiones de verdad y reconciliación o tribunales especiales para juzgar a responsables por crímenes de guerra). Así ha ocurrido, con ciertas variantes, en países como Mozambique, Sierra Leona, Angola y otros.

El caso del norte de Uganda es bastante particular. Dado que la inmensa mayoría de los combatientes del LRA han sido menores secuestrados y obligados a combatir en sus filas, muchos de ellos han conseguido escapar. A ello ha contribuido en buena parte algunas emisoras de radio (como Radio Mega y Radio Wa) que han repetido constantemente que la amnistía es auténtica, y han llevado a sus estudios a jóvenes retornados de la guerrilla que han dado testimonio de que se les ha recibido bien y han intentado animar a sus antiguos compañeros para que abandonen las armas.

A finales de 2004, la oficina de la Comisión de la Amnistía de Gulu había concedido algo más de 10.000 certificados a personas que habían vuelto del LRA. Esta cifra es ahora ciertamente más alta. Principalmente desde 2004 ha habido un constante flujo, no sólo de jóvenes rebeldes de tropa reclutados a la fuerza, sino también de oficiales guerrilleros de alta graduación que han dejado las armas. Hay que añadir que también los que son capturados en combate por el ejército ugandés han recibido la amnistía. Lógicamente, este movimiento de guerrilleros que dejan las armas ha debilitado notablemente al LRA. De este modo, el regreso de una buena parte de los combatientes rebeldes a la sociedad contra la que han ejercido su violencia, se ha producido no al final de la guerra, sino durante el transcurso de la misma. La mayor parte de la gente en el norte de Uganda ve este proceso con buenos ojos, puesto que piensan que esto acelerará el fin del conflicto. Pero al mismo tiempo, la desmovilización y reintegración de combatientes cuando la guerra sigue aún desarrollándose no están exentas de grandes dificultades:

- Muchos combatientes, cuando dejan las filas rebeldes, tienen grandes dificultades para encontrar un lugar en la sociedad. A menudo no tienen estudios, ni habilidades que les puedan procurar un puesto de trabajo. De este modo, muchos de ellos, menores incluidos, terminan enrolándose en el ejército gubernamental, que además de proporcionarles una protección, les da la oportunidad de hacer lo que saben –ejercer de soldados– y les asegura la satisfacción de sus necesidades más básicas como alimentos, casa y dinero.
- Cuando hablamos de “reintegración” en sus comunidades de origen, debemos pensar que en muchos casos tales comunidades simplemente han dejado de existir. A mediados de 2006, cuando empezaron las conversaciones de paz de Juba, el 95% de la población de los distritos acholi de Gulu, Kitgum y Pader vivían en campos de desplazados. Para un rebelde que ha dejado las armas, ir a vivir a un campo de desplazados internos es una opción muy poco atractiva, y en el caso de los niños soldado, simplemente pasan de una situación de trauma a otra.
- Además, es difícil valorar la verdadera actitud de la gente de a pie que recibe a estos ex combatientes. Se mezclan aquí diversos sentimientos. Por una parte, ven a los menores que vuelven de la guerrilla como víctimas más que como verdugos, y en muchos casos les acogen con un verdadero espíritu de reconciliación. Sin embargo, muchas veces la gente quiere que los antiguos rebeldes paguen por sus crímenes, pero por razones pragmáticas acallan estos sentimientos, en parte por miedo, en parte porque piensan que es mejor pagar un precio con tal de que se termine la guerra. No obstante, nadie sabe qué puede pasar un día si la guerrilla se queda totalmente desarmada y empiezan a darse casos de personas que buscan venganza, o al menos a llevar a los tribunales a los que les hicieron sufrir durante los años de la guerra.

– Los jefes tradicionales acholi, cuya institución se ha intentado revitalizar durante los últimos años con ayudas financieras de ONG internacionales y programas de ayuda de diversas embajadas y agencias de cooperación internacional, han organizado regularmente ceremonias para recibir a ex combatientes y “purificarles” de su condición. La mayor parte de ellas consisten en colocar en fila a los retornados y hacerles pisar un huevo. Sin embargo, muchos piensan que se trata simplemente de un ritual para dar la bienvenida a personas que, por el motivo que sea, han estado fuera de casa durante mucho tiempo (incluso por haber ido a realizar estudios), y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con un lavado de una culpa.

– Las sociedades en crisis suelen glorificar un pasado que están en proceso de perder, y la comunidad acholi no es una excepción. Quizás por eso se ha intentado vender al exterior la imagen de una sociedad que perdona, recibe y reintegra a sus transgresores. Esto es verdad hasta cierto punto, ya que tampoco se puede olvidar que hay bastantes casos de jóvenes ex combatientes que experimentan sentimientos de rechazo por parte de su propia familia, a veces por falta de recursos, y también por no querer vivir al lado de quien les ha causado tanto sufrimiento. Esta situación es especialmente dramática en el caso de las chicas jóvenes que, además de ser combatientes, han sido usadas en las filas rebeldes como esclavas sexuales de los comandantes. Muchas de ellas vuelven con niños pequeños y saben que no tendrán posibilidades de ser aceptadas en matrimonio. No son extraños los casos de chicas que terminan buscando al comandante con el que estaban en el bosque (una vez que éste también se ha rendido) para seguir viviendo con él, con el cual, después de todo, comparte preocupaciones y experiencias similares.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: EL DILEMA ENTRE PAZ Y JUSTICIA

Parece que cuanto más enrevesado es un conflicto, según pasa el tiempo más se complica, y entran en juego elementos que uno no puede imaginarse. Esto ocurrió con la entrada en escena de un nuevo actor: la Corte Penal Internacional (CPI), que ilustra de manera muy viva el conflicto de valores que a veces se da entre paz y justicia, los cuales a menudo resultan muy difíciles de conseguir al mismo tiempo.

Recordemos que en julio de 2002 varios países firmaron el Estatuto de Roma, por el que se creaba la Corte Penal Internacional. Con sede en La Haya (Holanda), este tribunal fue creado para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad. Durante la década de los años noventa, el mundo contempló los horrores de la antigua Yugoslavia, Rwanda y Sierra Leona, y tres tribunales especiales *ad hoc* fueron creados para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en cada una de estas guerras, en las que se llevaron a cabo limpiezas étnicas, violaciones masivas de mujeres, deportaciones de pueblos enteros, uso sistemático de niños soldado y genocidios planificados y ejecutados con la mayor frialdad y crueldad que cabía imaginar. El nuevo tribunal tenía potestades para juzgar estos crímenes realizados en cualquier parte del mundo. Era un paso gigantesco para terminar con la impunidad ante delitos cometidos contra los seres más vulnerables. El juez argentino Luis Moreno Ocampo fue designado fiscal general, con potestad para iniciar investigaciones y emitir órdenes internacionales de detención contra sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. Recientemente, parece que la comunidad internacional ha comenzado a caer en la cuenta de que las peores atrocidades acaecen en lugares pobres y remotos, lejos de los círculos de intereses del poder y las finanzas. Quizás por esta razón, desde el primer momento, la CPI se interesó por los crímenes contra la humanidad cometidos en dos de las guerras más graves y más olvidadas de los últimos años: la República Democrática del Congo y el norte de Uganda.

El conflicto del Congo, en el que habían estado involucrados unos siete países africanos entre 1998 y 2002, era extraordinariamente complicado; además, este país apenas contaba con infraestructuras, ejemplo de un Estado que casi no disponía de medios para funcionar. Por su parte, el norte de Uganda aparecía como un conflicto aparentemente más sencillo: un grupo de terroristas secuestraba a niños y cometía masacres así como mutilaciones entre la población. Parecía claro que el LRA tenía toda la culpa y el Gobierno de Uganda hacía lo que podía para defender a la población. A petición del presidente Museveni, a finales de diciembre de 2003, Ocampo apareció con el presidente ugandés en una rueda de prensa conjunta en la que anunciaron que la CPI estaba dispuesta a iniciar investigaciones sobre los crímenes cometidos por el LRA. En todos los lugares donde la población sufre injusticias y abusos, la noticia de que se va a perseguir a sus verdugos es siempre bienvenida. Pero en el caso del norte de Uganda pasó algo poco habitual: desde el primer momento, las víctimas recibieron mal el anuncio, que se hizo público a primeros de febrero de 2004.

Había varias razones que explicaban esta atípica situación. La CPI sólo tenía jurisdicción para juzgar crímenes cometidos a partir de julio de 2002, pero la guerra del norte de Uganda había comenzado en 1986. La CPI anunció que iba a investigar al LRA, pero la gente que vivía en los campos de desplazados del norte sabía que también el ejército ugandés en todos esos años había cometido grandes abusos contra la pobla-

ción civil. ¿Juzgaría la CPI también a altos mandos del ejército ugandés sospechosos de haber cometido crímenes de guerra? Además, si se anunciaba que se iba a detener a los miembros del LRA, ¿dónde quedaba la amnistía por la que la gente había luchado tanto y que estaba dando buenos resultados? Cuando se hizo el primer anuncio, no estaba muy claro si la CPI iba a encausar a todos los miembros del LRA o únicamente a los líderes principales. Y aun en el supuesto de que se declarara la intención de juzgar sólo a estos últimos, ¿como se podía realizar una negociación de paz? ¿Era posible decirle a Kony: “ven a negociar y, por cierto, cuando vengas te van a detener”? Tampoco se puede olvidar que no es lo mismo poner en marcha un sistema de justicia transicional una vez terminado un conflicto armado (como en el caso de Rwanda, Sierra Leona o la antigua Yugoslavia) que intentar juzgar crímenes de guerra cuando ésta no ha terminado todavía, como es el caso del norte de Uganda. Además, la CPI no tenía una fuerza armada especial a su disposición, sino que para llevar a cabo los arrestos dependía totalmente de los países miembros. Esto causaba un gran escepticismo, ya que si Kony no había sido detenido por el ejército ugandés en 18 años de guerra, ¿que garantías había de que una orden de un tribunal en La Haya cambiara las cosas? Y si Kony y sus principales comandantes estaban en Sudán, ¿quien los detendría allí?

Algunas de estas objeciones se las presenté al juez Moreno Ocampo el 1 de marzo cuando me llamó por teléfono y tuvimos ocasión de hablar durante una hora. Me aclaró que sólo pensaban emitir órdenes de arresto contra los cuatro o cinco cabecillas del LRA, responsables de los mayores crímenes. Cuando le pregunté sobre quién los iba a detener me contestó que Sudán. Esta respuesta me provocó un gran escepticismo. Aunque, por otra parte, los líderes de la sociedad civil del norte de Uganda llevábamos mucho tiempo insistiendo en que era necesaria una intervención de la comunidad internacional. ¿No era la CPI una respuesta de esta comunidad a nuestro grito de petición de ayuda? En cualquier caso, es justo reconocer, en honor a la verdad, que la CPI intentó dialogar con un gran número de personas que conocían la situación del norte de Uganda y que estaban involucradas en el proceso de paz. Durante aquel año y el siguiente invitarían a varias delegaciones a acudir a La Haya para entender mejor el problema. Y Ocampo tuvo paciencia y esperó durante más de año y medio antes de firmar las primeras órdenes de detención, que se harían públicas en octubre de 2005.

Juzgando las cosas desde el terreno, habría que decir que los resultados de la CPI en el caso del norte de Uganda han sido, cuanto menos, desiguales. Es muy posible que su intervención haya contribuido a atraer más la atención internacional hacia este conflicto, y que haya podido ser un factor para presionar al Gobierno de Sudán y hacer que deje de ayudar militarmente al LRA. También es muy posible que haya contribuido a empujar al LRA de forma más decisiva hacia la negociación. Pero por lo que se refiere a su papel para hacer justicia a las víctimas, hasta la fecha no ha conseguido que se efectúe ni un solo arresto de los encausados, lo que no es de extrañar si tenemos

en cuenta que sólo los estados miembros pueden ejecutar estas detenciones. Además, muchos siguen acusando a la CPI de haber sido un gran obstáculo en el camino hacia la firma del acuerdo final de paz. Recordemos que la razón que dio Joseph Kony para no haber firmado el acuerdo de paz en abril de 2008 fue que las órdenes de arresto contra él y sus comandantes principales no habían sido retiradas. Durante la última fase de las negociaciones, las dos partes firmaron uno de los protocolos sobre responsabilidades y reconciliación, en el que daban como solución sustituir la Corte Penal Internacional por una sala especial del Tribunal Supremo ugandés que juzgaría los casos de crímenes de guerra más graves. Ni que decir tiene que el ejército ugandés ha dejado muy claro que ellos no han cometido ningún delito de lesa humanidad, y que si ha habido algún caso de abuso de los derechos humanos cometido por alguno de sus miembros, se trataría de casos aislados que ellos ya habrían castigado.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

En el momento de escribir estas líneas no se ha firmado el acuerdo total de paz entre el Gobierno de Uganda y el LRA. Joseph Kony se ha negado a firmar, según dice, mientras la CPI no retire las órdenes de detención. A finales de septiembre de 2008 los rebeldes atacaron diversos pueblos en el noreste de la República Democrática del Congo y el sur de Sudán, y secuestraron a cientos de jóvenes, mataron a numerosas personas y destruyeron casas. Todos aceptan hoy que la violencia del LRA se ha convertido en un problema internacional que afecta por lo menos a cuatro países africanos.

Aunque los combatientes del LRA están actualmente lejos de la frontera con el norte de Uganda, la gente que ha sufrido sus ataques violentos durante muchos años sigue viviendo en una gran incertidumbre. Muchos han intentado volver a sus pueblos de origen, pero cuando llegan allí les faltan servicios básicos como agua, escuelas para los niños y servicios de salud. Otros se han reasentado en los nuevos campos satélite. En muchos casos se produce una gran división en el seno de las familias, las cuales a menudo tienen a los hijos en los campos principales donde hay posibilidades de ir a la escuela, mientras que los padres han intentado reconstruir sus casas en sus aldeas de origen, y van y vienen del campo de desplazados. La gente sigue traumatizada y la reconciliación es aún un desafío urgente. Hay, además, una cierta impresión de que la comunidad internacional, cuya atención tanto costó atraer durante muchos años, se está cansando del norte de Uganda, que sigue pareciendo un conflicto de difícil resolución.

Madrid, octubre 2008.

Referencias bibliográficas

- Allen, T. *The international Criminal Court and the Lord's Resistance Army*. London: Zed Books, 2006.
- Behrend, H. *Alice Lakwena and The Holy Spirits War in Northern Uganda, 1986-1997*. Oxford: James Currey, 1999.
- Doom, R. and Vlasenroot, K. "Kony's Message: a new *koine*? The Lord's Resistance Army in Northern Uganda". *African Affairs*. Vol 98. No. 390 (1999). P. 5-36.
- Finnström, S. *Living with Bad Surroundings: War, History and Everyday Moments in Northern Uganda*. Durham, Duke University Press, 2008.
- Finnström, S. "An African hell of colonial imagination? The Lord's Resistance Army/Movement in Uganda, another story". *Politique africaine*. No. 112 (2008). P. 119-139.
- Gersony, R. *The Anguish of Northern Uganda, Results of a field-based assessment of the conflicts in Northern Uganda*. Kampala, United States Embassy: Usaid. 1997.
- Lamwaka, C. "Civil war and the peace process in Uganda, 1986-1997". *East African Journal of Peace and Human Rights*. Vol 4. No. 2 (1998). P. 139-169.
- Lucima, O. (ed.) *Protracted Conflict, Elusive Peace: Initiatives to end the Violence in Northern Uganda*. London: Conciliation Resources, Kacoke Madit, 2002.
- Perrot, S. "Les sources de l'incompréhension. Production et circulation des savoirs sur la Lord's Resistance Army". *Politique africaine*. No. 112 (2008). P. 140-160.
- Temmerman, E. de. *Aboke Girls: Children Abducted in Northern Uganda*. Kampala: Fountain Publishers, 2001.
- Van Acker, F. "Uganda and the Lord's Resistance Army: the new order no one ordered". Vol. 103. No. 212 (2004). P. 335-357.